

proteje el art. 22 de la Constitución General.

2º Hágase saber, publíquese ésta sentencia en el *Diario Oficial* del Estado, sáquense las copias respectivas para el *Semanario Judicial* y remítanse los autos en revisión á la Suprema Corte de Justicia. El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Manuel G. Solana*.—*Luis G. Chavez*.

Es copia que certifico. Zacatecas, Enero 9 de 1875.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 8 de 1875.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Zacatecas por Natividad Rivera, Bernardino Calzada, Juan López primero, Genovevo Hernandez, Marcos Mandols, Cruz Miranda, Perfecto Gonzalez, Marcos Rodriguez, Bartolo Torres, Anastasio Morillo, Cayetano Ortiz, Plácido Contreras, Mucio Albino, Santiago Salas, Doro-teo Medina, Matilde Juarez, Julian Arellano, Angel Albino y Trinidad Ortiz, contra el C. Jefe Político de aquella ciudad, por haber mandado que se les ponga grillete para extinguir su condena, con cuyo acto se viola en su persona la garantía que otorga el art. 22 de la Constitución general. Vista la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los quejosos y las demás constancias que obran en autos. De conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Zacatecas en 6 de Enero del presente año, que amparó á los quejosos.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To-
-
-

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.

Certifico:—que el C. Ministro Juan J. de la Garza intervino en la votación de este amparo, y que por haberse ausentado de esta capital antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma. México, Marzo 4 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 5 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, Oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Francisco Gonzalez y Ascension Ramirez, contra el Jefe político de San Miguel de Allende, que los ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteadores.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Francisco Gonzalez y Ascension Ramirez, han promovido el presente recurso de amparo contra el Jefe Político de San Miguel de Allende que los juzgó y sentenció, condenándolos á la pena de muerte, con arreglo á la ley de 23 de Mayo de 1872, violando en concepto de los quejosos, las garantías individuales consignadas en los arts. 13, 14, 20, 21 y 23 de la Constitución Federal.

El Jefe Político de San Miguel de Allende, al contestar el oficio en el que se le pidió el informe de que habla el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestó que no podía rendir dicho informe, por haber remitido el proceso á la Legislatura del Estado para la resolución sobre la gracia de indulto que habian solicitado los reos.

Durante el término probatorio, los quejosos presentaron como prueba la copia del acta criminal que se les instruyó, y en ella aparece, que Ascencion Ramirez, tenia desde algun tiempo enemistad mortal con Santos Hernandez, habiendo tenido varias riñas en las que alguno de ellos resultaba herido. En la última fué herido Ramirez, y no habiéndose aprehendido á su contrario, pidió una orden para verificarlo, á uno de los alcaldes de Allende, y con dicha orden, solicitó á Ramirez para que le acompañara á aprehender á Santos Hernandez, pues segun decia, tenia orden de aprehenderlo muerto ó vivo. Encontraron á Hernandez tocando en la puerta de una huerta de San Miguel, armado de un puñal y ebrio, en cuyo lugar empezó la riña, concluyendo, segun las pruebas que se han rendido en este juicio, á poca distancia de las casas de los suburbios de San Miguel, y resultando gravemente herido Santos Hernandez.

En este hecho, el que suscribe, no encuentra un caso que pueda comprenderse en la ley que se aplicó á los quejosos.

Es de la exclusiva competencia de los jefes políticos, valorizar los datos de criminalidad que resultan contra un procesado en los delitos de asalto y plagio; pero es necesario, para que no se infrinja el art. 13 de la Constitucion, que el hecho, es decir, usando del lenguaje de los criminalistas, el cuerpo de delito esté plenamente probado.

En el acta criminal que obra en autos, está demostrada la existencia del delito de heridas con circunstancias mas ó menos agravadas, pero no un caso de asalto, robusteciendo éste concepto, las otras pruebas que sobre la conducta de los reos y

TOMO VII.—PARTE IV.

circunstancias del hecho, rindieron los quejosos.

Por cuyo motivo, el Promotor fiscal, suplica al Juzgado se sirva fallar este juicio, declarando que es de concederse el amparo de la Justicia de la Union que solicitan los quejosos.

Guanajuato, Agosto 14 de 1874.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Guanajuato, Diciembre 10 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Francisco Gonzalez y Ascencion Ramirez, contra el O. Jefe Político del Departamento de Allende, que los juzgó y condenó á muerte, como salteadores, con violacion de las garantías que otorgan los arts. 13, 14, 21 y 23 de la Constitucion, segun manifiestan los quejosos.

Resultando: que los promoventes fueron procesados conforme á la ley de 23 de Mayo de 1872, por el asalto y heridas que sufrió Simon Hernandez el día 16 de Noviembre del mismo año, en los suburbios de la Ciudad de Allende.

Considerando: que la citada ley en su art. 19, declara: que se entienden por salteadores el que, ó los que *en los caminos ó lugares despoblados*, asalten al individuo con violencia con objeto de robarlo, herirlo ó matarlo, y los que *en gavilla* atacaren en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes.

Considerando: que del acta que se instruyó á los nominados reos, aparece que el delito que se les imputa, no fué perpetrado en algun camino, sino en la presa del Obraje, segun el testimonio del herido y de uno de sus agresores, ó en la huerta del Obraje, segun la declaracion de Ascencion Ramirez.

Considerando: que uno y otro de los dos expresados sitios, se hallan ubicados dentro del perímetro de la ciudad de Allende, co-

mo consta plenamente probado en autos con el juicio emitido por dos peritos topógrafos y con la inspección ocular practicada por el Juzgado de Letras de aquella ciudad.

Considerando: que atendida la situación del lugar que fué teatro del asalto, es evidente que éste delito no se cometió en despoblado, sino dentro del recinto de la población de Allende.

Considerando: que los asaltantes no formaron gavilla, supuesto que la sentencia fulminada contra ellos, solo declaró á Francisco Gonzalez y Ascencion Ramirez, autores del asalto: y para que haya gavilla que es lo mismo que cuadrilla, no basta la reunión de dos personas, y se necesita el número de cuatro ó mas, según la significación natural de ambas palabras y el espíritu del art. 12 de la ley de 5 de Enero de 1851, que literalmente dice:

«Se reputa robo hecho en *cuadrilla*, aquel á que hubiesen concurrido mas de tres malhechores.»

Considerando: que averiguado como lo está, que el asalto de que se trata, no acaeció en los caminos ni en lugares deshabitados, sino en la ciudad de Allende, sin que haya intervenido la circunstancia de ser ejecutado en gavilla; hay que convenir legítimamente hablando, en que los quejosos no deben ser tenidos como salteadores, por razón de faltar en ellos algunos de los requisitos esenciales que el art. 1º de la ley de 23 de Mayo de 1872, exige para reputar saltador á un acusado.

Considerando: que la misma ley suspende exclusivamente para los salteadores y plagiarios algunas de las garantías individuales.

Considerando: que los peticionarios por no pertenecer á esa clase de delinquentes, disfrutan de todos los derechos del hombre reconocidos por el Pacto fundamental de la República.

Considerando: que los preceptos constitucionales 13, 14, 21 y 23, han sido concul-

cados en el proceso que se aniró contra los quejosos; porque se les juzgó por un juez especial y con arreglo á una ley privativa; se aplicó ésta ley á un hecho que no está comprendido en ella; se les impuso una pena propiamente tal por una autoridad política; y se decretó contra ellos la pena de muerte por un delito que no está especificado en el art. 23 de la Constitución.

Por las anteriores consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Unión, ampara y protege á Francisco Gonzalez y Ascencion Ramirez, contra el proceso que les instruyó el C. Jefe Político de Allende y contra la sentencia que pronunció contra ellos, condenándolos á la pena capital como salteadores.

Notifíquese este fallo á las partes, públíquese en el periódico *Oficial* y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Alvino Torres*.—*Luis G. Medina*.

Es copia que certifico. Guanajuato, Diciembre 17 de 1874.—*Luis G. Medina*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Febrero 8 de 1875.—Visto el juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Gonzalez y Ascencion Ramirez, contra los procedimientos del Jefe Político de San Miguel de Allende que, con violación de las garantías que consignan los arts. 13, 14, 21 y 23 de la Constitución federal, los ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteadores, aplicándoles la ley de 23 de Mayo de 1872. Visto el informe de la autoridad, la causa instruida á los quejosos, el parecer fiscal, el fallo del inferior

con cuanto mas se tuvo presente y ver convinco.

Por sus mismos legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 17 de Diciembre del año pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Francisco Gonzalez y Ascencion Ramirez contra el proceso que les instruyó el C. Jefe Político de Allende y contra la sentencia que pronunció condenándolos á muerte como salteadores.

Devuélvase estas actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M^o Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—L. M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 17 de 1875.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el C. Juez de Distrito de Durango por el C. Antonio Rodriguez, contra los procedimientos del C. Juez 1^o del ramo criminal de la capital de ese Estado, que lo redujo á prision, y le formó causa por peculado.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

No obstante el corto tiempo que se me ha fijado para emitir mi parecer fiscal en

este juicio de amparo promovido por el C. Antonio Rodriguez, contra los procedimientos del Juez 1^o de lo criminal de esta ciudad, he hecho con la atencion y detenimiento que me han sido posibles, el exámen de los fundamentos en que ha basado el referido funcionario su acto de prision contra el mencionado C. Rodriguez, con motivo de la acusacion que le ha formulado el C. Procurador del Ayuntamiento de esta ciudad por el delito de peculado.

Me ha parecido necesario, segun mi juicio, á fin de convencirme de la legalidad de los procedimientos del C. Juez 1^o de lo criminal, que ha conocido de la referida acusacion, calificar por las constancias de autos, si el delito que la motivó está debidamente probado, como la ley lo exige para los casos en que por su indubitable existencia haya de decretarse la prision contra la persona que lo ha cometido, y cuya circunstancia funda y motiva la causa legal del procedimiento por medio del mandamiento escrito de la autoridad competente. Sobre esto paso á expresar mi parecer, reasumiendo en extricto esas constancias de autos, sobre las que se ha resuelto que el C. Rodriguez es reo de peculado, puesto que se tiene decretada su prision.

Peculado, no es otra cosa, que el hurto de caudales públicos cometido por los que intervienen en ellos. Bajo este principio, y recorriendo todo lo practicado en este expediente para el efecto de la calificación de ese delito, se tienen las siguientes constancias.

El C. Antonio Rodriguez recibió en Diciembre de 1867, la suma de novecientos veintidos pesos cincuenta centavos para cubrir en dicho mes los gastos de policía: en el mes de Enero siguiente de 1868, rindió al Ayuntamiento la cuenta de distribucion de la suma recibida, y el mismo Ayuntamiento pasó esa cuenta al exámen de su comision del ramo, ordenando al C. Rodriguez entregara en el acto á la Tesoreria Municipal, los noventa y cuatro pesos cin-